



## VII ASAMBLEA DE LA MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA:

### CRECER Y LUCRAR ES EL ÚNICO CAMINO



El derecho a cobrar una pensión, en el momento en el que el empresario ya no considera útiles a los trabajadores costó a lo largo de la historia, sangre, sudor y lágrimas. Desde el siglo XIX, con la formación del movimiento obrero moderno, ese derecho estuvo en primera línea en las luchas del proletariado en todo el mundo. Hasta su implantación, el destino de millones de trabajadores que por su edad eran expulsados del mercado laboral, era la indigencia o, en el mejor de los casos su supervivencia mediante la solidaridad familiar.

Por consiguiente, el surgimiento del movimiento obrero y la lucha por un sistema de reparto que asegurara unas condiciones dignas, una vez acabada la vida laboral, han ido siempre parejas.

El derecho a la sanidad, a la educación y a una pensión, una vez acabada la vida laboral, han sido conquistas de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo también han sido una de las patas sobre las que descansa la estabilidad y la legitimación social del sistema capitalista. Si es así, ¿porqué el capitalismo se empeña ahora en destruir lo conseguido? Porque la caída de la tasa de beneficios y la acumulación de los capitales excedentarios amenaza con llevarlo al colapso. El capital necesita desesperadamente encontrar nuevas fuentes de beneficio, que le permitan seguir reproduciéndose. Agotadas las fuentes tradicionales, el capital ha invadido el sector público en todo el mundo. Ha reducido la fiscalidad de los Estados, endeudándolos hasta el límite de la solvencia. Si no hay impuestos, o estos no son suficientes, al Estado sólo le queda la posibilidad de endeudarse y vender todo aquello que puede ser una fuente de negocios para los acreedores, con el pretexto de pagar la deuda. Por otro lado, una cantidad creciente de los presupuestos del Estado se entregan al gran capital con la excusa (injustificada, por otra parte) de que la gestión privada es más eficiente que la pública (por ejemplo, se entregan millones y millones de euros a la sanidad privada para que haga lo que debería hacer la pública).

El gran capital necesita ahora nuevos sacrificios para poder sobrevivir y lanza en todo el mundo una formidable ofensiva contra el sector público, con el objetivo de desmantelarlo y de que se le entregue, vía privatizaciones, todo aquello que puede darle beneficios, aunque sea a costa de acabar con los derechos sociales y las conquistas de los trabajadores y las clases populares (educación, sanidad, pensiones...).

En todo el mundo capitalista estamos asistiendo a la progresiva liquidación del llamado “Estado del bienestar”. Los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, aplican las mismas medidas, en nombre del pago de la deuda y el supuesto mantenimiento del sistema público. No importa que las privatizaciones, lejos de mejorar los servicios (es el pretexto que siempre han utilizado sus defensores) sean cada vez más caros, se deterioren y se encojan cada vez más. La sanidad y la educación pública sufren un grave proceso de deterioro. De esta forma se obliga a todo aquel que puede a pagarse sus propios servicios (mutuas médicas, colegios privados...), mientras se reducen al mínimo nivel a todos aquellos que no pueden hacerlo. Mientras tanto se entrega al capital privado, no solo las joyas de la corona del sector público, sino que también se canalizan cantidades crecientes de los presupuestos del Estado a los capitales privados (subvenciones, rebajas fiscales, estímulos al empleo...).

Durante un largo período de tiempo los gobiernos han rebajado los impuestos a las grandes empresas y a la burguesía, e incluso a las llamadas clases medias (de esta forma, aumentaba el consumo, aunque hubiera menos dinero para los servicios sociales), cambiando la política fiscal por deuda pública que ahora acabamos pagando entre todos.

La deuda pública se ha incrementado de tal manera que se ha vuelto impagable, esto no ha impedido que se haya transformado en un mecanismo de drenaje por el que los grandes capitales aumentan sus plusvalías a costa de las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares en general. Tal como dice el artículo 135 de la Constitución española (aprobada por el PP y el PSOE) el pago de los intereses de la deuda externa, están por delante de cualquier otro tipo de gasto (las pensiones, por ejemplo).

La destrucción de los sistemas públicos de pensiones y su privatización se han convertido en uno de los principales objetivos. Por mucho que digan los “expertos” a sueldo del capital financiero, que nos bombardean diariamente desde los medios de comunicación (también en manos de sus amos), nos sobran las experiencias sobre cuáles son los resultados cuando se llevan a cabo ese tipo de políticas. Ejemplos como el de Chile, USA o Alemania deberían bastar para comprender cual es el objetivo consciente de todos los que abogan para que se lleven a cabo esas medidas. La destrucción del sistema público ha llevado a las pensiones muy por debajo del nivel de subsistencia.

En Chile, la dictadura de Pinochet, siguiendo los consejos de los Chicago Boys de Milton Friedman (entre ellos José Piñera, hermano del actual presidente del país), impuso la privatización de las pensiones, que pasaron desde 1981 a manos de las administradoras (AFP) de los bancos (entre ellos el BBVA y el Santander). Los trabajadores estaban obligados a entregar un 10% de su salario a sus planes personales de pensiones, mientras que las empresas dejaban de cotizar por esa cantidad. Curiosamente el ejército y los carabineros siguieron dependiendo del Estado para percibir sus pensiones. Por algo sería, ¿no? De todos los elementos del modelo chileno de desregulación, privatización y ortodoxia fiscal capitalista, el que más elogios suscitó en las conferencias bancarias internacionales fue el sistema de capitalización de las pensiones, basado en un sistema de ahorro forzado, que canalizaron miles de millones de euros hacia las arcas del sistema financiero.

El resultado final fue la caída de las pensiones a niveles por debajo del nivel de subsistencia. Según una comisión asesora impulsada por la presidenta Bachelet, en 2014, el 79% de las pensiones estaba por debajo del salario mínimo del país y el 44% se situaba por debajo del umbral de la pobreza. Los trabajadores se veían obligados a trabajar hasta los 70 años, para no caer en la miseria más absoluta. La mitad de los trabajadores que cotizaron entre 25 y 33 años se jubilan ahora con una pensión inferior al 21% de sus salarios. Sin embargo, las empresas administradoras, entre 2010 y 2015 duplicaron sus beneficios y en los nueve primeros meses de 2015 aumentaron sus ganancias en un 71,4% respecto al año anterior. Sin comentarios.

La subida de los precios del Metro en Santiago fue la chispa, pero la quiebra del sistema de pensiones y las condiciones en las que viven los trabajadores y la casi totalidad del colectivo de pensionistas ha sido el barril de pólvora que estalló. El desastre social en el que se encuentra sumido Chile en la actualidad ayuda a explicar la tenacidad con la que la clase obrera lleva meses enfrentándose al régimen heredado de la dictadura.

En USA, con el estallido de la crisis de 2008 y las hipotecas basura, muchos pensionistas norteamericanos perdieron sus pensiones, o vieron cómo se reducían en un 50% de media. La quiebra en cadena de los planes privados llevó a una buena parte de los antiguos pensionistas a la indigencia, a los bancos de alimentos y a formar parte del ejército de los sintecho que pueblan las calles del país.

En Alemania, por ejemplo, a menudo mostrada en nuestro país como el gran ejemplo a imitar, los índices de pobreza se han disparado en los últimos años. El 48% de las pensiones públicas alemanas actuales están por debajo de los 800 euros mensuales y el 62% no llegan a los 1.000. En el caso de las mujeres, las pensiones inferiores a los 800 euros alcanzan incluso el 64% del colectivo. En el país germano, un ingreso per cápita inferior a los 969 euros significa oficialmente ser pobre.

El aumento de los empleos de servicios en detrimento de los industriales, más cualificados y con mejores convenios colectivos, va estrechamente unido al crecimiento de estas pensiones bajas. La precarización de importantes sectores económicos va ligada a la pobreza entre los pensionistas. Siguiendo las recetas neoliberales, el sistema público ha sido tan vapuleado en los últimos años en Alemania que ya no evita la pobreza. Millones de pensionistas se ven obligados a trabajar en sus casas (minijobs) para poder llegar a final de mes.

El estado español no es ninguna excepción. El gran capital financiero exige el control vampírico del sistema público de las pensiones. Algo así como que se le entregue al zorro el control del gallinero. Sin embargo, el primer gran problema con el que tuvieron que enfrentarse hace décadas es que éste gozaba de buena salud y no podía justificarse su entrega sin más ni más. Lo primero que se tenía que hacer era “deteriorarlo”.

Los gobiernos de derechas y de izquierdas en nuestro país han seguido el mismo camino, cargar sobre la caja del sistema público de pensiones, lo que eufemísticamente han venido a llamarse “gastos impropios” que debía pagar el Estado a través de los Presupuestos Generales: el pago de las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos, los gastos de la administración, el mantenimiento de los edificios... Además de todo esto, durante años se han ido reduciendo progresivamente las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social con el pretexto de incentivar el empleo. El mismo ministro de la Seguridad Social el señor José Luis Escrivá, perteneciente al “gobierno más progresista” de la historia, tuvo que reconocer que por este camino se han perdido del orden de 23.000 millones de euros anuales. El Tribunal de Cuentas por su parte indica que entre 1989 y 1913 desaparecieron 103.690 millones de euros, mientras que otras fuentes calculan que el monto total del saqueo asciende hasta los 500.000 millones.

Está bien que se denuncie la desaparición de todos estos recursos de la caja del sistema público de pensiones, pero al parecer hasta ahora nadie habla de devolverlos. Por lo tanto, cuando dicen que no hay dinero, para justificar los recortes nos están ocultando que no lo hay porque antes se lo llevaron para dedicarlo a otros menesteres que no tenían nada que ver con las pensiones. Por consiguiente, la exigencia de una Auditoría de la Seguridad Social debería ir acompañada de otra exigiendo la devolución del dinero saqueado. No debería importarnos demasiado que aleguen que el Estado ya no tiene esos recursos. En cualquier caso, no es culpa de los pensionistas, y no son éstos los que tienen que pagar las consecuencias.

La drástica caída de los salarios, la precariedad laboral, el fraude, el trabajo en negro y los contratos con bonificaciones empresariales también han provocado la disminución de las pensiones presentes y futuras, ya sea porque las cotizaciones son cada vez más bajas (provocando el déficit, ya que con ellas hay que pagar las pensiones actuales), ya sea porque los trabajadores que ahora cobran salarios cada vez más reducidos, también cobrarán el día de mañana, pensiones inferiores.

Nuestro país tiene, en conjunto, una de las fiscalidades más bajas de toda Europa Occidental, (una fiscalidad que favorece a las rentas más altas, para descargar la mayor parte de su peso, en las de los trabajadores y las clases populares) lo que nos lleva a un gasto en prestaciones sociales con respecto el PIB, por debajo de la media existente en la Unión Europea.

Después del saqueo de la caja de las pensiones, el segundo paso fue separar la Seguridad Social de los Presupuestos Generales del Estado en 1997 gracias al Pacto de Toledo. De esta forma se disimulaba el posterior incumplimiento de las funciones que la Constitución exige del Estado: La garantía, vía presupuestos, del poder adquisitivo de las pensiones. Todo ello entre un bombardeo de propaganda y pensamiento único totalmente falsario de todo el régimen del 78.

Se hizo en un momento en el que todavía había excedentes, para blanquear la maniobra. Sin embargo, cuando los ingresos superaron a los gastos, la mayor parte de ese dinero sobrante no fue a parar a la hucha de las pensiones. En el año 2000, de los 6.800 millones de euros, de superávit, el gobierno sólo ingresó 600 millones. El resto se destinó a otros objetivos que nada tenían que ver con las pensiones. Si se hubiera aportado lo que realmente correspondía entre 2000 y 2011, y se hubieran limitado los “gastos impropios” tal como correspondía, en 2017 el superávit habría sido de 108.866 millones de euros. Después vino la crisis, los recortes, la caída de los salarios, las reformas laborales, la explosión del desempleo, la precariedad laboral. La puntilla contra la hucha de las pensiones vino de la mano de Rajoy, con el cambio de la ley para saltarse el tope del 3% de disposición anual. En pocos años se agotó el remanente.

Ahora hemos llegado a un nuevo paso en el proceso de liquidación del sistema público. La hucha ha tocado fondo, y supuestamente, para evitar el colapso, los gobiernos del PP y del PSOE-UP, no han echado mano a los Presupuestos Generales del Estado, como tenía que ser, sino que se han dedicado a conceder préstamos ficticios a la Seguridad Social (como si ésta fuera una entidad distinta y separada del Estado). Por supuesto, esta deuda se va incrementando cada año y un día tendrá que pagarse. Sólo existen dos formas para hacerlo: O el Estado vía contable asume que lo de los préstamos es un engaño (se saca dinero de un bolsillo para ponérselo en el otro) y asume su responsabilidad (la que le confiere la Constitución), o bien da un nuevo hachazo al sistema público y entrega el patrimonio de la Seguridad Social a los capitales privados para saldar la deuda.

¿El objetivo de todo esto? Justificar la salvación del sistema público de pensiones, cuando en realidad lo que se está procediendo es a su progresiva liquidación y entrega a los bancos y aseguradoras. La supuesta falta de dinero también ha servido para avalar el endurecimiento de las condiciones de acceso a las pensiones y su congelamiento. Los pretextos utilizados para justificar lo injustificable constituyen un verdadero insulto a la inteligencia de los trabajadores, repetidos incansablemente como un mantra por la corte de “expertos” a sueldo del capital financiero.

¿Cómo pueden decir sin que se les caiga la cara de vergüenza, que la causa de la supuesta crisis del sistema público de pensiones es el aumento de la esperanza de vida, o la llegada de la generación del baby boom? Si esto fuera cierto, no lo sabían hace cuarenta años, ¿cuándo decían que el sistema estaba asegurado?, Y si fuera así, ¿porqué los distintos gobiernos no sólo no tomaron medidas para evitarlo, sino que su política agravó la situación? ¿Cómo pueden ahora proponer prolongar la vida laboral de los trabajadores cuando casi la mitad de nuestros jóvenes no encuentra trabajo?

Mienten más que hablan. Es cierto que cada vez hay menos trabajadores activos por cada pensionista (nadie habla del creciente ejército de desempleados que no encuentra trabajo), pero también es cierto que la productividad en nuestro país se ha multiplicado por seis en los últimos cuarenta años, es decir, que en la actualidad con una menor cantidad de trabajadores se produce más que antes, con plantillas más numerosas. Entonces, ¿dónde han ido a parar los beneficios de ese aumento de la productividad? A los bolsillos de los empresarios. Eso se lo callan.

Con la connivencia cómplice de los gobiernos, el capitalismo ha provocado la tormenta perfecta: Ha saqueado el sector público y ahora, supuestamente para preservarlo, exige seguir endureciendo las condiciones de acceso (como si las empresas estuvieran dispuestas a mantener trabajadores de 67 años con sus achaques y sus sueldos “elevados”), recortar las pensiones (vía IPC más otros, factor de sostenibilidad, aumento de las penalizaciones por prejubilación...) y abrir la puerta a los planes de pensiones privados obligatorios (una parte de los salarios, o de las cotizaciones a la Seguridad Social se entregarán a los bancos y aseguradoras, con lo que agravará todavía más el déficit). Todo con tal de meter mano en el pastel de los 140.000 millones de euros que supone la recaudación anual del sistema público de pensiones.

Hasta ahora los planes privados de pensiones han sido un verdadero fracaso en nuestro país, los bajos salarios impiden el ahorro y por consiguiente que se puedan hacer aportaciones. Pero es que, además, la cantidad de dinero que las entidades financieras han dedicado para promoverlos no ha podido superar la desconfianza de la población hacia ese tipo de productos. Ni siquiera han servido las supuestas ventajas fiscales. Ahora por lo tanto se trata de obligar a los trabajadores a hacerlo, traspasando una parte de las cotizaciones que van destinadas a la Seguridad Social (y agravando su déficit) o descontando una determinada cantidad de sus nóminas (ya de por sí, bastante exiguas).

La implantación del nuevo modelo obedece a las presiones del FMI, del Banco Central Europeo y del Banco de España, representantes destacados de los intereses del capitalismo financiero. Tras intentar imponer reformas legislativas que fracasaron ante las huelgas generales (1986-1988-1992) el capitalismo llegó a la conclusión de que había que buscar el consenso político y social para lograr su propósito. Más lento, pero más seguro. Una vez abierta la puerta de la privatización de las pensiones, de lo que se trataba era de abrirla cada vez más. Esta es la función del Pacto de Toledo y no otra.

El Pacto de Toledo se creó en 1995 para neutralizar políticamente las políticas de recorte y privatización que reclaman la Unión Europea y el IBEX-35. El bipartidismo y el resto de los partidos liberales se apuntaron con entusiasmo en medio de la feria de las puertas giratorias. Los sindicatos mayoritarios se dejaron seducir oliendo más poder institucional, protagonismo en la negociación colectiva y una nueva fuente de financiación. Es importante resaltar el papel de freno en las luchas y la confusión que han llevado a cabo, mientras negocian a espaldas de los trabajadores, con el gobierno y la patronal, a cambio de una parte de las comisiones de gestión de los planes de pensiones de empleo (forman parte de la comisión gestora de numerosos fondos, de los que perciben sendas comisiones). No podemos olvidar que COESPE nació por la dejación de sus funciones por parte de las direcciones de los sindicatos mayoritarios).

Las recomendaciones del Pacto de Toledo no intentan resolver la crisis de ingresos, sino que plantean recortes al reparto, que permitan rebajar las cuotas patronales y las prestaciones para que sean insuficientes y así impulsar los sistemas privados. El PdT pretende cambiar nuestro sistema por otro nuevo que por un lado y a largo plazo desembocaría en pensiones públicas mínimas para los trabajadores, por otras pensiones privadas complementarias a través de Planes de pensiones de empleo negociados por los sindicatos y gestionados por las entidades financieras, y por otras pensiones privadas individuales para los que se las puedan pagar contratadas directamente con las entidades financieras. Se trata de sustituir el actual sistema público, de reparto, solidario y redistributivo, por sistemas de capitalización financiera de ahorros que generen el gran negocio de comisiones desatadas y fondos de inversión para la banca.

Con el Pacto de Toledo, el capitalismo pretende imitar el cuento de la rana y el caldero. Que nos vayamos acostumbrando a que las cosas vayan cada vez peor, sin rebelarnos. Tras la cortina de humo de la unidad de los partidos parlamentarios, la patronal y los sindicatos mayoritarios, se intenta que los trabajadores aceptemos los recortes como algo irremediable y hasta objetivo, o de que los veamos como un mal menor, como un plan para salvar el sistema público de las pensiones, o que simplemente demos nuestro visto bueno a la idea de que en el futuro éstas se habrán reducido hasta el nivel de subsistencia. La Marea Pensionista de Catalunya está radicalmente en contra del Pacto de Toledo, pero no contra éste, sino contra cualquier Pacto de Toledo. El sistema público es una conquista de los trabajadores, y por consiguiente estamos en contra de que nadie negocie a nuestras espaldas el futuro de las pensiones. Nadie ha elegido a los partidos, ni las cúpulas sindicales, y mucho menos a las organizaciones empresariales para que decidan en nuestro nombre.  
¡No al Pacto de Toledo!

Se trata de romper definitivamente el sistema de reparto solidario entre los trabajadores, como ha sido hasta ahora, para transformarlo en una guerra de todos contra todos (cada trabajador tendrá su propia mochila, y será sólo de su responsabilidad que aumente de tamaño o no). Los trabajadores estarán cada vez más solos e impotentes frente al Estado y el gran capital financiero. Se trata de que al final de la vida laboral, el trabajador descubrirá la realidad que le han ido preparando: una paga del Estado de importe mínimo con la que será imposible vivir, y otro procedente de lo que quede del dinero gestionado por los bancos (que probablemente será menor que la suma de los ingresos realizados durante toda la vida laboral).

La entrega de una parte de las cotizaciones de la Seguridad Social a los planes privados de pensiones controlados por las entidades financieras es un verdadero regalo a una banca que cada vez tiene más problemas de supervivencia. Los fondos privados no tienen ninguna garantía de rendimiento, ni siquiera de mantener el valor del capital aportado. La gestión totalmente opaca de los fondos de pensiones permite al capital financiero endosarles los valores de su cartera que tienen pérdidas, sin coste alguno. Al fin y al cabo, independientemente de cuales sean los resultados, con pérdidas o ganancias, cobran la misma comisión. Este es el gran negocio de las gestoras de los fondos, que están en manos de los bancos y aseguradoras, y en menor medida los sindicatos mayoritarios que forman parte de estas.

Con frecuencia los resultados de los fondos privados son inferiores al IPC y muchos de ellos arrojan pérdidas importantes. En realidad, sólo resultan interesantes a los propietarios de los grandes patrimonios por las desgravaciones fiscales que obtienen, pero no a los trabajadores con salarios medios (los de salarios bajos ni siquiera pueden permitirse hacer aportaciones regulares). Algunos de sus defensores contemplan la posibilidad de que el Estado acabe siendo el garante de que estos fondos obligatorios no quiebren, o tengan pérdidas, con la finalidad de que el impositor obtenga al final, por lo menos el dinero que invirtió. Si esta cláusula acabara aplicándose, seríamos todos los que, a través de los Presupuestos Generales, los que acabaríamos pagando los tejes y manejes de la banca y las aseguradoras.

La pandemia del Covid-19 no ha hecho otra cosa que agravar la situación del sistema público. El préstamo de la Unión Europea destinado a la recuperación de la economía española lo pagaremos entre todos. El dinero recaudado por la Seguridad Social para las pensiones es la garantía que la Ministra de Economía, Nadia Calviño ha ofrecido a Bruselas por las “ayudas”. Esto no es nuevo. Ya en el 2008, las pensiones públicas fueron la garantía que ofreció el gobierno español en el caso de que no se pudieran pagar las deudas derivadas de un posible impago del rescate financiero.

El movimiento pensionista no tiene otra salida que acercarse a la juventud y a los trabajadores. Unos porque cuando lleguen a la jubilación no saben lo que les espera, y otros porque ya han asumido que ellos no van a tener ninguna pensión. Su futuro es el nuestro, porque nosotros también somos trabajadores. Es una ilusión peligrosa creer que los ataques que ahora están sufriendo los futuros pensionistas no se volverán en algún momento en contra nuestra. Nosotros también entramos en el mismo saco. Es fundamental que encontremos la forma para llegar a las fábricas y a los trabajadores. Es imprescindible que encontremos la manera de aproximarnos a los jóvenes. Nos han dividido, nos han separado, y, por tanto, nos han debilitado.

Como trabajadores pensionistas que somos, estamos en contra del Pacto Social que se está tejiendo contra nuestros derechos y conquistas sociales. Por ese motivo estamos al lado de los trabajadores activos. Cuando les atacan a ellos, también nos están atacando a nosotros. Esto no es una frase bonita, es una realidad que tenemos que asumir. La caída de los salarios afecta a las cotizaciones a la Seguridad Social y por lo tanto agrava la crisis de ingresos, y en su momento repercutirá en el endurecimiento del acceso al sistema público de pensiones, y en el importe de éstas. Que los trabajadores tengan salarios más altos implica que las pensiones también sean más elevadas. ¡No al Pacto Social! ¡No a las privatizaciones del sector público!

Es necesario profundizar las vías que ya se han abierto en la Marea Pensionista de Catalunya. Ahora sólo es cuestión de que lo llevemos a cabo.

1) El camino de la Extensión Laboral. Contemplamos varias formas para llegar a las empresas, a través de los sindicatos, de los comités de empresa, o de los mismos trabajadores en sus centros de trabajo:

- Con la colaboración de los sindicatos combativos. Tenemos que establecer estrechos lazos de colaboración, ayudarles en temas de formación para delegados sindicales sobre el tema de las pensiones, participar en su prensa y en sus boletines. Buscar la forma de que allí donde se pueda, se hagan asambleas de trabajadores para informar, discutir y tomar medidas. Allí donde se pueda dentro de la empresa, donde no sea posible, fuera. Hay que advertirles de lo que se les viene encima.

- A través de nuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos o antiguos compañeros de trabajo... Hay que entregarles nuestras hojas (la carta a los delegados y comités de empresa) para que las pongan en el tablón de anuncios, o para que presionen a sus representantes sindicales.

- Con ayuda de los numerosos abogados laboristas que siempre han sido valiosos aliados de la Marea Pensionista.

- Pese a nuestras grandes diferencias con las direcciones de los sindicatos mayoritarios, existen en CCOO y UGT muchísimos compañeros que están con nosotros. Nuestra labor es pedirles que asuman nuestra plataforma reivindicativa, que la difundan en sus organizaciones y que apoyen las acciones de Marea Pensionista de Catalunya.

- Establecer una web del simpatizante de la Marea, en la que se pueda dar e intercambiar información. No es tarea nuestra convertirnos en una gestoría, pero sí que lo es propagar al máximo toda la información que tenemos a nuestro alcance y conseguir el máximo de apoyos en los centros de trabajo.

-

2) La mayor parte de los trabajadores no están afiliados a ningún sindicato. Esto nos lleva a la conclusión de que hay que recuperar la calle. Si la gente no viene a la plaza Universidad (o a la plaza del Ayuntamiento de cada localidad, donde nos concentramos todos los lunes), nosotros tenemos que ir a donde está la gente. Por ese motivo hemos empezado a organizar las Ágoras. Asambleas en la calle donde la gente pueda informarse, discutir y proponer formas de lucha. Por supuesto, esto va mucho más allá de las pensiones. Siempre que tengamos claro que no podemos disolvernarnos en los movimientos sociales, y que nuestra tarea principal es seguir luchando por el futuro del sistema público de las pensiones. Pero como trabajadores pensionistas somos conscientes que también nos afecta los ataques contra la sanidad y la educación públicas, las reformas laborales, la Ley Mordaza, la inmigración, el racismo y la xenofobia, la discriminación de género...

Las Ágoras son una forma de colaboración entre las distintas fuerzas vivas en los barrios, distritos y localidades (organizar las Ágoras, invitar a los que presentarán los temas, dar a conocer entre los vecinos cuando y donde se realizarán, esas son las tareas que debemos asumir los movimientos organizados). Pero tiene que quedar claro que un Ágora no es un mitin, ni una clase magistral, es una Asamblea, y, por lo tanto, nuestra función se limita a crear las condiciones para que la gente participe, diga lo que piensa, discuta y vote iniciativas para poder después llevarlas a cabo). La proliferación de las Ágoras, la periodicidad en la que se realicen, puede llevarnos a la posibilidad de que éstas se coordinen y se asuman respuestas colectivas, y que por lo tanto potencien su capacidad de movilizar a la calle.

Nuestra participación en la formación y realización de las Ágoras por todos los temas que nos afectan, también nos ayudará a movilizar a toda esa gente (y a esas organizaciones con las que trabajaremos para prepararlas) en la lucha en defensa del sistema público de pensiones.

Estos son los instrumentos de los que hasta ahora se ha dotado la Marea Pensionista de Catalunya. Nuestra tarea ahora es desarrollarlos. Es necesario extender el movimiento a los lugares donde todavía no estamos implantados. Para conseguirlo es necesario que las plataformas locales existentes hagan suyo este objetivo, buscando contactos y colaborando con éstos en la tarea de crear nuevos grupos de la Marea Pensionista.

Aunque nuestra organización es soberana, es importante que nuestras experiencias sobre formas de movilización y de lucha sean conocidas, no sólo en Catalunya, sino en todo el estado. Tenemos que buscar la forma para darlas a conocer en la COESPE (y si otras que hoy no forman parte de ella también lo hacen, tanto mejor) para que puedan desarrollarlas en sus respectivos territorios.

Uno de los principales objetivos que nos hemos marcado, es recuperar, de una vez por todas, la unidad del movimiento pensionista. La ruptura fue artificial y provocada por causas ajenas a nuestros intereses como colectivo. La prueba es que casi todos defendemos la misma plataforma de reivindicaciones y con el resto las diferencias son mínimas. La división del movimiento supuso un fuerte debilitamiento de nuestras luchas y un motivo de desmoralización de muchos compañeros y compañeras que acabaron marchándose a casa. Para conseguir la unidad del movimiento hemos de dar pasos decididos en esa dirección: buscar la confluencia en las movilizaciones y en los objetivos, trabajar juntos y sin sectarismo por la extensión y la coordinación de las plataformas del movimiento pensionista. Y, sobre todo, trabajar por una Marea Pensionista de Catalunya independiente, asamblearia y democrática y sin tuteladas, ni manipulaciones de ninguna clase.



Marea Pensionista de Catalunya colaborará con COESPE para construir un movimiento coordinado a escala europea. La ofensiva contra el sistema público de las pensiones no sólo se dirige contra nosotros. La imposición de los PEPP en 2019, aprobados por el Parlamento Europeo, aplicados a través de las leyes y las ventajas fiscales de cada país, se está haciendo contra todos los trabajadores de la Unión Europea.

La Marea Pensionista de Catalunya y COESPE deberían plantearse la posibilidad de trabajar por una movilización continental a medio plazo, aprovechando los contactos que ya existen. No hay que olvidar que el núcleo central desde el que se conspira contra las pensiones públicas (deudas, PEPP...), con la complicidad del capital financiero internacional no está en Madrid, sino en Bruselas y en el BCE.

La Marea Pensionista de Catalunya es un movimiento transversal, pero estamos al servicio incondicional de los trabajadores y las clases populares. Hoy más que nunca, hemos de ser coherentes, hasta las últimas consecuencias, con nuestra máxima: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Barcelona, 18 de junio de 2021